



UN POLVORÍN LLAMADO TAMAULIPAS... Y EL DETONADOR ESTÁ EN MANOS DE LA CORTE

Todo lo que puede salir mal en Tamaulipas ha salido mal: hay una ríspida contienda por la gubernatura, que incluye denuncias de persecución política desde el actual gobierno panista; existe un riesgo de violencia durante la jornada electoral y a ello se suma la agitación en materia de seguridad pública por la confrontación de los cárteles de la droga que pretenden el control de la plaza. Por si fuera poco, en manos de la Suprema Corte está el decidir si procede el desafuero contra el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca. Y si no procede, "se engallará y reforzará su intervención" en los comicios, advierten desde la oposición.

LUCIANO CAMPOS GARZA

CIIDAD VICTORIA, TAMPS.- El ambiente político en Tamaulipas se crispó en la antecámara de la elección para gobernador, el próximo 5 de junio. Ni el PAN está dispuesto a ceder el gobierno ni Morena pretende soltar lo que ya consideraba como una gubernatura más en su bolsa.

La confrontación ha escalado con acusaciones cruzadas entre Morena y el PAN sobre la cercanía con un empresario asesinado, ligado al huachicol; órdenes de aprehensión para alcaldes opositores y la amenaza de desafuero contra el mandatario panista, Francisco García Cabeza de Vaca, sobre la cual habría definiciones esta semana en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El próximo 1 de junio, a sólo cuatro días de la elección estatal, la SCJN determinará si procede el desafuero del gobernador panista, con lo que se cumpliría la orden de aprehensión en su contra girada desde 2021, por presunto uso de recursos de procedencia ilícita.

A la tensa situación política en el estado se suma el anuncio de un patrullaje preventivo





Viene de la
página anterior



García Cabeza de Vaca. Futuro en suspenso

de la Guardia Nacional y del Ejército durante la jornada electoral, que estará presente en los 43 municipios a partir del lunes 30.

Por si fuera poco, hay un permanente estado de agitación en materia de seguridad pública en la entidad, principalmente por la confrontación del Cártel del Golfo, Cártel del Noreste y Los Zetas, con sus respectivos subgrupos, que luchan por expandir territorialmente sus actividades de venta de droga, secuestro, extorsión, ejecuciones, tráfico de personas y combustible.

A escala nacional, Tamaulipas ocupa el sitio 20 de homicidios dolosos, con mil 938 casos desde que se inició el sexenio hasta abril último, registra el reporte diario del gobierno federal.

Pero, de acuerdo con el Informe Nacional de Seguridad, el estado es uno de los primeros ocho en huachicoleo.

Incluso, la situación que vive el proceso electoral de Tamaulipas fue planteada en la OEA, en Washington, por el senador Emilio Álvarez Icaza, quien denunció el involucramiento de la delincuencia organizada en los comicios estatales, particularmente en favor del candidato de Morena, Américo Villarreal, apoyado por una red de "macrocriminalidad", según dijo.

Por su parte, la diputada local morenista Magaly Deandar Robinson dijo a **Proceso** que la fiscalía estatal ha girado unas 40 órdenes de aprehensión con el evidente propósito, apunta, de intimidar a políticos, seguidores y operadores afines a la 4T, que respalda a Villarreal Anaya, mismo que puntea las encuestas sobre el candidato panista, César Verástegui Ostos, conocido como *El Truko*, que abandera la coalición Va por Tamaulipas, formada por PAN, PRI y PRD.

La legisladora reynosense advierte que el entorno político está tan agitado por las amenazas del gobernador hacia los opositores que se percibe peligro rumbo a los comicios, al grado de que ya se anunció la intervención de las fuerzas federales para reforzar la vigilancia el 5 de junio.

Por entre los candidatos que lideran los sondeos de opinión, se asoma el de Movimiento Ciudadano, Arturo Díez Gutiérrez, un empresario tamaulipeco que busca convertirse en la opción "disruptiva" y quien, a diferencia de sus contrincantes, está ajeno a las acusaciones de alianzas con criminales, afirma el dirigente estatal naranja Juan Carlos Zertuche.

"En medio de una guerra electoral hemos visto denuncias y amparos, licencias, intimidaciones y amenazas entre los partidos tradicionales. La coyuntura la aprovecha Movimiento Ciudadano (...) y Arturo Díez está agarrando fuerza. Estamos en medio de un lodazal, donde los que pierden son los tamaulipecos", sostiene.

El PRD, que apoya a Verástegui en la coalición, se deslinda de las acciones del gobier-

no estatal, que es acusado de hostigar a opositores. El líder estatal del PRD, David Valenzuela Barrios, dice que su partido históricamente ha sido objeto de persecución, por lo que le pide al mandatario panista y al presidente Andrés Manuel López Obrador que no usen la ley para su beneficio electoral.

Mientras tanto, la presencia pública del gobernador se limita a unos pocos actos de inauguración de calles, ceremonias por el Día del Maestro o apariciones en universidades, aunque recientemente recibió a los senadores del PRI Miguel Ángel Osorio Chong y Claudia Ruiz Massieu, junto con la panista Nadia Navarro, lo que quedó registrado en una fotografía publicada por su hermano, el senador panista Ismael García Cabeza de Vaca, el 16 de mayo.

Elabón perdido

Asesinado en San Pedro, Nuevo León, el 22 de noviembre último, el nombre del empresario tamaulipeco Sergio Carmona Angulo, a quien se acusaba de importación ilegal de hidrocarburos, está en el centro de los señalamientos que se cruzan los candidatos.

Un documento de la Administración Antidrogas de Estados Unidos (DEA), fechado en diciembre del año pasado y publicado por el medio digital Código Magenta, menciona a Carmona en una investigación sobre lavado de dinero.

Además, en un memorándum mostrado por la publicación digital se expone que, luego del homicidio, su hermano Julio se reunió el 3 de diciembre de 2021 con el agente especial de la DEA Greg Miller, para ofrecerse como testigo protegido a cambio de dar información sobre sus actividades criminales en México y Estados Unidos.

El documento incluye una lista de personas que han colaborado con "el sujeto" para el financiamiento de Morena, en la que aparece el candidato morenista Américo Villarreal Anaya, así como Erasmo González Robledo, diputado federal; José R. Gómez Leal, superdelegado federal en Tamaulipas; Eduardo A. Gattás Báez, alcalde de Victoria, y Carlos Peña Ortiz, alcalde con licencia de Reynosa.

El martes 24 Peña Ortiz se separó indefinidamente del cargo como munícipe y dos días después se supo que desde el miércoles 18 había sido girada una orden de aprehensión en su contra por uso de recursos de procedencia ilícita, denuncia que había sido interpuesta por un particular el año pasado.

A lo largo de estos meses el morenista tramitó hasta nueve amparos que fueron perdiendo efecto, reveló el fiscal Anticorrupción en la entidad, Raúl Ramírez. ▶



Viene de la
página anterior

El alcalde con licencia, de quien se desconoce su paradero, fue sucesor de su madre en la alcaldía, Maki Ortiz, quien luego de renegar del PAN buscó la candidatura de Morena a la gubernatura. Después de expresar públicamente su inconformidad por un presunto fraude en el proceso interno, finalmente Maki se sumó a la causa de Américo.

En su columna de *El Universal* del 9 de febrero pasado, Salvador García Soto publicó que García Cabeza de Vaca fue quien pidió al FBI que indagara a los Carmona.

Sergio presentó declaraciones que luego fueron turnadas a la DEA. La versión señala que el empresario financió con 500 millones de pesos a los candidatos de Morena en las elecciones de 2021. Dieron recursos a morenistas en Nuevo León, Nayarit, Zacatecas, Campeche, Sinaloa, Michoacán y en las dos Baja Californias. El año pasado aportó hasta 100 millones de pesos en Tamaulipas para la elección de diputados locales, federales y alcaldías.

El jueves 26 el senador Emilio Álvarez se entrevistó con el secretario general de la OEA, Luis Almagro, ante quien denunció, entre otros aspectos, el involucramiento de la delincuencia en los comicios de Tamaulipas, principalmente para respaldar a Américo Villarreal.

"Lo que está pasando en Tamaulipas es un caso extremo de la intervención del financiamiento ilegal y la intervención de redes de macrocriminalidad -dijo Álvarez Icaza-. Hay ya evidencia para afirmar que el candidato de Morena está recibiendo recursos de procedencia ilícita, bien por automóviles, por camionetas, por uso de aviones o, incluso, por denuncias que se han hecho porque su hijo recibió más de 20 millones de dólares.

"(Hay) una red de macrocriminalidad que alcanza hasta el tío de Mario Delgado. Esta intervención escandalosísima estaría no sólo estableciendo una continuidad

con lo que se denunció en las elecciones de medio término de 2021 en lugares como Michoacán, San Luis Potosí y Sinaloa, sino que ahora estaría dando pie a una edición de un nuevo pacto de corrupción e impunidad", señala el senador independiente en entrevista.

Ante Almagro, quien recibió sus comentarios "con interés y preocupación", Álvarez advirtió sobre el "grandísimo" riesgo en que se encuentran las elecciones y la democracia en México, si el narcotráfico define el resultado que debe emerger de las urnas, por lo que es necesario encender alertas internacionales sobre el país.

Por su parte, la diputada Magaly Deandar Robinson señala que el miedo a que el PAN pierda la gubernatura y de que su gobernador vaya a la cárcel han causado la desesperación de García Cabeza de Vaca.

En esta embestida contra los morenistas, que la legisladora considera "una carcería de brujas" para evitar que se revelen las "marranadas" que hizo el PAN en el sexenio, se han girado las órdenes de arresto contra ediles y otros simpatizantes del partido, con el propósito de desprestigiar a Villarreal y, con ello, influir en el electorado el día de los comicios.

Sobre las órdenes de aprehensión que giró la fiscalía estatal, mencionó que algunas van contra los alcaldes morenistas Carmen Lilia Canturosas, de Nuevo Laredo, por presuntos delitos electorales; Eduardo Gattás, por enriquecimiento ilícito, así como contra Peña Ortiz. Dice que incluso Maki Ortiz está en la misma situación, aunque protegida por un amparo.

La edil de Díaz Ordaz, Nataly García Díaz, estaría también en el mismo supuesto por delitos electorales, abunda Deandar; así como el líder de la sección 51 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud, Adolfo Sierra, recientemente detenido; y hasta el diputado federal guanajuatense

Emmanuel Reyes Carmona, promotor del candidato Américo Villarreal y quien ha señalado una supuesta compra de votos y repartos de despensas en favor de El Truko.

El jueves 26, Reyes Carmona, integrante de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, publicó un mensaje en redes desmintiendo una supuesta privación de su libertad, aunque afirmó que durante la campaña en Tamaulipas ha sido "víctima de amedrentamiento".

"Esto (el proceso electoral) lo vemos muy peligroso. La verdad estamos muy preocupados por la forma en que se maneja el candidato del PAN. El gobierno (estatal) se está metiendo, poco faltó para que al gobernador le den nombramiento de operador político", dice la diputada Deandar.

Para Alejandro Rojas Díaz Durán, senador suplente de Morena, el interés del gobernador de actuar contra los alcaldes es impedir que operen políticamente en la elección, al considerar que son los que traen, desde los municipios, estructura partidista.

Y dice que la elección será afectada invariablemente por la determinación el 1 de junio, de la SCJN sobre el caso de García Cabeza de Vaca. Si determina que el Congreso local no tiene facultades para darle fuero, procederá la orden de aprehensión y se designará un sustituto. Pero si el panista permanece en el puesto, favorecido por el fallo, se "engallará" y reforzará su intervención en favor del Truko.

Así como hay señalamientos del gobierno estatal de la relación de los Carmona Angulo con alcaldes y políticos de Morena, ligados al grupo del dirigente nacional Mario Delgado, también quedó al descubierto la relación de contratos millonarios que los hermanos empresarios tuvieron con la actual administración.

Mediante diversas firmas, los hermanos Carmona facturaron por lo menos 376 millones de pesos al gobierno de García Cabeza de Vaca, en tiempos en los que era secretario general de gobierno el ahora candidato panista Verástegui (**Proceso 2374**).

Han sido tan insistentes los señalamientos de la injerencia de la Fiscalía General de Tamaulipas en el proceso electoral, que la dependencia tuvo que salir a aclarar que "no hay órdenes de aprehensión ni actos de molestia contra candidatos y sus familiares".

Pero aclara que "las investigaciones en curso", que pudieran vincular a otras personas, sin mencionar a quienes, "fueron iniciadas por denuncias interpuestas por hechos ajenos a la elección del 5 de junio". Y reitera: "La fiscalía niega categóricamente que intervenga en un proceso electoral que compete de manera exclusiva a candidatos, partidos y electores". ●



Deandar. Denuncia persecución estatal